



**Impacto del programa familias en acción en los resultados de las elecciones
presidenciales del 2010 en Colombia**

TRABAJO DE GRADO

Natalia Cardona Barona.

Director del Proyecto:

JUAN PABLO MILANESE, PhD.

UNIVERSIDAD ICESI

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIA POLÍTICA CON ÉNFASIS EN RELACIONES INTERNACIONALES

SANTIAGO DE CALI

2019

Tabla de contenido

Resumen	4
Abstract	5
Introducción	6
1. Revisión de la literatura	10
2. Marco teórico	14
3. Metodología	20
4. Análisis de Resultados	26
4.1. El candidato y/o el partido de gobierno.	27
4.1.1. Resultados electorales.	28
4.1.2. Las Estrategias de los Partidos.	30
5. Consideraciones Finales	37
Bibliografía	39

Lista de ilustraciones

Tabla 1. Paradigmas teóricos clásicos del comportamiento electoral.	15
Tabla 1: Efectos del programa Familias en Acción en las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia.	22
Gráfica 1: Familias en Acción <i>versus</i> Votos por Juan Manuel Santos	24
Gráfica 2: Mapa de calor de la distribución de Familias en Acción (2010)	27

Resumen

Este artículo indaga sobre los impactos del programa Familias en Acción a nivel municipal sobre los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia para el año 2010 tomando como eje de análisis la síntesis de aportes del modelo de comportamiento electoral racional y sociológico.

Los resultados indican que, aunque el rendimiento electoral de Juan Manuel Santos se vio beneficiado por los votos de aquellos municipios que percibieron Familias en Acción, estos no lo votaron solo por el hecho regulado de recibir una transferencia monetaria; sino que, se vieron fortalecidos por un proceso de convivencia y socialización, propiciado por un factor geográfico y de redes sociales. Los cuales, parecieran ser determinantes claves para entender tanto las pretensiones detrás de la distribución del programa, como la formación de preferencias electorales dentro -y entre- los municipios receptores.

Palabras Clave: Familias en Acción, Programas sociales, Comportamiento electoral, Elecciones, Análisis espacial.

Abstract

This article inquires about the impacts of the Familias en Acción program at the municipal level on the electoral results of the first presidential round in Colombia for 2010, taking as an axis of analysis the combination of contributions from the model of rational and sociological electoral behavior.

The results indicate that, although the electoral performance of Juan Manuel Santos was benefited by the votes of those municipalities that received Familias en Acción, they did not vote for it solely because of the regulated fact of receiving a monetary transfer; rather, they were strengthened by a process of coexistence and socialization, fostered by a geographical factor and social networks. Which, seem to be key determinants to understand the claims behind the distribution of the program and the formation of electoral preferences within -and between- the recipient municipalities.

Keywords: Families in Action, Social Programs, Electoral Behavior, Elections, Spatial Analysis.

Introducción

La aparición de las transferencias monetarias y otras políticas de protección social en la agenda política internacional se remonta a finales de la década de 1990. Este tipo de transferencias son, básicamente, “pagos no contributivos directos, regulares y predecibles que aumentan y suavizan los ingresos con el objetivo de reducir la pobreza y la vulnerabilidad” (DFID, 2011:17). No obstante, el auge de este tipo de programas ha sido impulsado y probado principalmente por los gobiernos de los países en desarrollo, en particular por los países de ingresos medios.

Por tal motivo, son principalmente los países de América Latina quienes ofrecen la evidencia base sobre los efectos a largo plazo de los programas de transferencia social, como ocurre con el programa Progresía de México (más tarde, renombrado Oportunidades) iniciado en 1997, Bolsa Familia en Brasil en 2003 y en este caso, Familias en Acción en Colombia.

Éste último esquema fue creado en el año 2000 y fue diseñado inicialmente para una duración de tres años (de junio de 2001 a junio de 2004) con una meta de 340.000 familias, ubicadas en aproximadamente 300 municipios rurales con menos de 100.000 habitantes cada uno. A pesar de sus pretensiones iniciales, el programa lleva en la actualidad tres etapas que han ido aumentando su alcance e incidencia en la política social nacional, al punto de convertirse en 2012 en una política de Estado según la Ley 1532.

Este trabajo es un estudio orientado hacia el caso del programa Familias en Acción que busca indagar sobre una de las suposiciones de la literatura de TCM, a saber que estos esquemas se han concebido como una posibilidad de ser un gran atractivo para los responsables políticos, en tanto ofrece un servicio eficaz y medios relativamente baratos para combatir la pobreza extrema, mientras potencialmente puede proporcionar retornos electorales mucho más rápidos en comparación con reformas estructurales menos visibles (Hall, 2012).

En términos generales, la difusión de la investigación en torno al programa Familias en Acción ha sido relevante y masiva, no solo por la primicia que tuvo un programa de transferencias monetarias condicionadas a gran escala en el país, sino también por las subsecuentes conjeturas o críticas -en ocasiones, infundadas- que su aplicación y posterior ampliación, generó en los medios de comunicación y el campo académico (Llano, 2014).

Una de las suposiciones que estos esquemas han concebido es su posibilidad de ser un gran atractivo para los responsables políticos, en tanto ofrece un servicio eficaz y medios relativamente baratos para combatir la pobreza extrema, mientras potencialmente puede proporcionar retornos electorales mucho más rápidos en comparación con reformas estructurales menos visibles (Hall, 2012).

Sobre este último punto, cabe resaltar cómo contrastan la más amplia proporción de estudios a nivel internacional con respecto a los estudios a nivel nacional o local, que se han centrado en los posibles efectos electorales de estos planes sociales.

El presente trabajo es un estudio orientado hacia el caso de Familias en Acción que busca indagar y profundizar en los impactos del programa sobre los resultados electorales, específicamente, hacia los de la primera vuelta presidencial en Colombia durante el año 2010.

Esto, debido a que estas elecciones fueron el tránsito entre el fin del segundo período de Álvaro Uribe Vélez, quien instauró el programa y el primero de su sucesor, Juan Manuel Santos, lo cual nos permite apreciar mejor si el capital electoral que se creó durante los dos períodos con el programa muestra rendimientos electorales con un nuevo titular de gobierno.

En ese sentido, la pregunta central gira en torno a, ¿Cuál es el impacto de la pertenencia al programa Familias en Acción a nivel municipal en el voto de los beneficiarios del mismo durante la primera vuelta de los comicios presidenciales del 2010 en Colombia?

Asimismo, en concordancia con las conjeturas de la literatura, en la que se espera que los votantes respondan positivamente a la distribución estratégica de beneficios sociales por

parte de los titulares de gobierno (Cornelius, 2004; Díaz-Cayeros, Estevez y Magaloni, 2007, 2009; Green, 2006; Zucco, 2010). La hipótesis estaría orientada a que los municipios beneficiarios de la segunda versión del programa Familias en Acción votan efectivamente a favor del candidato de gobierno, Juan Manuel Santos, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2010 en Colombia.

Para su desarrollo, se hace uso de una perspectiva primordialmente cuantitativa que pueda brindar un soporte basado en datos de cómo -y en qué medida- se dan dichos impactos y cómo estos logran ser interpretados. Adicional, los resultados hallados son contrastados recurrentemente con el caso brasileño de Bolsa Familia, el cual es usado como punto de referencia, dadas algunas similitudes y la vasta literatura e investigaciones asociadas a este programa.

En lo que concierne al marco teórico, se optó por el uso híbrido de aportes provenientes tanto del modelo de comportamiento electoral racional como del sociológico, con el fin de propiciar una interpretación multiabarcadora de los resultados que no limitara el rango de acción y decisión de los agentes involucrados a versiones demasiado rígidas o demasiado laxas de su proceder.

Respecto a la metodología aplicada, se utilizó un modelo cuantitativo de regresión lineal multivariado y posteriormente, un modelo de Lag espacial sobre una unidad de análisis de 1.120 municipios donde se distribuyó Familias en Acción para beneficiarios nivel 1 de SISBEN -el cual se normaliza sobre una base de 1000 habitantes- y sobre los resultados electorales a favor de Juan Manuel Santos durante la primera vuelta de las presidenciales del 2010. Además, se utilizó tres variables de control vinculadas a aspectos sociales como la pertenencia a una minoría, el nivel de cobertura educativa y las Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI).

Para cerrar, el texto está dispuesto en cinco secciones. La primera atañe a una breve revisión de la literatura sobre los programas de transferencias condicionadas, particularmente sobre aquellos relacionados a los impactos políticos y/o electorales de los mismos. La segunda presenta los tres principales modelos de comportamiento electoral y discute sobre la necesidad de una convergencia entre las teorías racional y sociológica para el análisis pertinente de las dinámicas de un programa social como Familias en Acción. La tercera sección hace una descripción y desarrollo de la metodología aplicada. Mientras, la cuarta y quinta sección comprenden el análisis de los hallazgos y las consideraciones finales, respectivamente.

1. Revisión de la literatura

El estudio relativo al impacto de los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina representa una de las líneas de estudios académicos más actuales no solo por su amplia y sistemática proliferación, sino también por los resultados e incidencia que estos han tenido en la política social nacional de los mismos.

En ese sentido, son múltiples las aristas que pueden ser consideradas a la hora de abordar el impacto de este tipo de programas para un país o para una región. Prueba de ello son los estudios a nivel internacional y nacional emprendidos para evaluar su impacto en la mitigación de la pobreza y contribuir al desarrollo del capital humano.

Sin embargo, lo que aquí nos compete es hacer énfasis en los posibles efectos estratégicos -directos o indirectos- de este tipo de programas como un canal altamente politizado con incidencia en el comportamiento del voto y, en consecuencia, en los resultados electorales.

Indicado esto, a nivel internacional podemos encontrar estudios como el de Sanches (2013), que analiza las elecciones presidenciales latinoamericanas llevadas a cabo entre 1990 y 2010 y muestra que la inversión en programas de transferencias monetarias condicionadas no tiene un efecto significativo en el desempeño electoral de los candidatos en ejercicio y que antes bien, producen reordenamientos en la composición de las bases electorales de dichos candidatos, aumentando la participación de los pobres, en detrimento de la participación de los ricos.

Este argumento es reforzado por los estudios nacionales del caso brasileño, realizado por Zucco (2013) quien, a partir del programa Bolsa Familia intenta explicar el cambio en la base de votación de Lula para su segunda presidencia en las elecciones de 2006, donde su

posición se alejó de las regiones más desarrolladas del país y se intensificó en las áreas más pobres.

Asimismo, Sanches (2016) aunque muestra que la probabilidad de reelección no aumenta con las inversiones en programas de transferencias monetarias condicionadas, sí coincide en que los presidentes que han invertido en estos programas perdieron votos en las áreas más desarrolladas y obtuvieron votos en las áreas empobrecidas de sus países.

Por su parte, en estudios posteriores, Layton y Smith (2015) analizaron cómo la asistencia social da forma a los resultados electorales en América Latina y aunque rastrean efectos electorales en varios países, aún no está claro si los efectos varían entre países. Lo que su estudio sí aportó de forma particular fue que la asistencia social hace que los destinatarios sean más propensos a participar en la actividad electoral y que, una vez en las urnas, voten por el candidato titular.

A este respecto, estudios sobre el caso Progresá en México por De La O (2013) permiten reforzar la idea de que si bien el porcentaje de votos de los partidos de la oposición no se vio afectado significativamente por el programa en dicho país, la inscripción en el programa sí trajo consigo un efecto movilizador que aumentó la participación de votantes en las elecciones presidenciales de 2000 en México.

Parcialmente, aunque pareciera que los efectos en materia electoral varían entre un estudio y otro, entre un país y otro, lo que sí es afín en los estudios agregados es el reordenamiento de las bases electorales de los presidentes que promovieron o continuaron los programas y los efectos de la inscripción en el programa para la movilización de los titulares como votantes, lo cual podría ser un resultado deseable en tanto aumenta la representación, un elemento básico que apuntala una democracia.

Por su parte, a nivel local los estudios enfocados en los posibles efectos electorales del programa Familias en Acción en Colombia tuvieron su apogeo fundamentalmente tras el debate

que generó en 2010 la posibilidad de una segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien se consagró como el titular del programa.

A este respecto, algunos estudios trabajaron dicho efecto en las elecciones presidenciales, como el caso de Nupia (2011), el cual mide el efecto del programa Familias en Acción en las elecciones presidenciales a nivel municipal durante los dos períodos de Álvaro Uribe Vélez. El autor concluye que este programa tiene un efecto electoral muy significativo en tanto los votantes no solo estuvieron dispuestos a modificar sus preferencias políticas a favor de los candidatos del gobierno (Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) a cambio de mayores ingresos; sino que también la expansión geográfica que tuvo el programa durante el año de 2006 obtuvo una recompensa electoral para el uribismo. Pues, mientras algunos municipios no reportaron votaciones altas por Uribe en 2002, sí lo hicieron en 2006 y en 2010 con Juan Manuel Santos (Barrios González, 2011).

Por su parte, Baez, *et.al* (2013) estima el efecto de la inscripción a Familias en Acción de las mujeres que eran destinatarias directas de la transferencia de efectivo sobre la intención de votar y la participación para las elecciones de 2010, a partir de los resultados según las mesas de votación. Sus conclusiones apuntan a que las mujeres receptoras tienen más probabilidades de registrarse para votar, así como más probabilidades -con respecto a los no beneficiarios- de emitir su voto y que en las mesas donde hubo una mayor proporción de beneficiarias del programa registradas, el porcentaje de votos a favor del gobierno de turno fue mayor.

Respecto al caso colombiano también, rastreamos trabajos como el de Botero, Mejía y Raga (2008) donde se indaga por los factores que explican la inversión en estructura vial en Colombia y el uso populista de este durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe para asegurar los apoyos políticos necesarios para mantenerse en el poder. En una vía similar, Barrios (2011) analiza la configuración de redes clientelares en el marco del programa Familias

en Acción, así como los recursos materiales y simbólicos que se movilizan para obtener ventajas políticas en determinada coyuntura.

Con estos antecedentes en consideración, la presente investigación busca aportar a la discusión sobre la dinámica electoral detrás de la implementación de programas de TMC como el de Familias en Acción para las elecciones del 2010 a nivel municipal y así, complementar los esfuerzos metodológicos ya emprendidos en torno al componente politizador de los programas de transferencia monetarias condicionadas.

2. Marco teórico

Poner énfasis en el impacto electoral de los municipios beneficiarios de programas TMC implica indagar cómo se dan los comportamientos electorales de estos individuos y bajo qué premisa o premisas teóricas es apropiado abordarlos. Por ello se parte de una breve exposición de las vertientes teóricas que atraviesan la categoría del comportamiento electoral a lo largo de la literatura con el fin de brindar un balance de la temática en discusión y posteriormente, analizar y sustentar en base a las pretensiones del estudio, la selección de una o más de ellas.

Así pues, el estudio relativo al comportamiento electoral, al ser una de las líneas de investigación más clásicas y trabajadas por la ciencia política, es una de las áreas que más literatura comprende, que más se ha desarrollado y en ese sentido, es también una en la que más enfoques teóricos convergen. No obstante, dada la variada y extensa producción de posibilidades (e interpretaciones) y en ocasiones, la no aprobación académica de muchas de ellas, se ha optado por partir de los paradigmas teóricos base que dieron sustento a toda la línea de investigación, a saber: el modelo psicológico, el modelo sociológico y el modelo racional (ver Tabla 1).

Tabla 1. Paradigmas teóricos clásicos del comportamiento electoral.

Paradigmas Teóricos			
Modelo	Exponentes	Premisas	Vertientes
Sociológico	Paul Lazarsfeld (1948)	El entorno social, los clivajes y los grupos primarios con los que el individuo se relaciona condicionan su decisión.	<ul style="list-style-type: none"> - Contextos Sociales - Modelo de Influencia Espacial - Teoría de las Redes Sociales
Psicológico	Agnus Campbell (1960)	Las identidades partidarias individuales, los <i>issues</i> y la imagen del candidato le permiten tomar una decisión al elector.	
Racional	Anthony Downs (1957)	El individuo es un ser racional que hace una evaluación costo/beneficio de lo que los partidos en disputa le ofrecen y toma una decisión basado en sus intereses.	<ul style="list-style-type: none"> - Modelos Espaciales - Racionales (véase: Olivella y Rodríguez, 2009) - “<i>Economic voting</i>” o “<i>Pocketbook voting</i>” (vease: Carpini y Keeter, 1993, 1996; Lau y Redlawsk, 1997) - “Issue voting”

Fuente: Elaboración propia, a partir de Dalton (1996), Montecinos (2007), Sulmont (2010) y Kushick (2004).

Cómo es posible advertir, ningún enfoque pareciera brindar una explicación acabada del comportamiento electoral pues, aunque cada vertiente responde a conductas distintas, estas no son lo taxativamente contradictorias como para ser mutuamente excluyentes.

Esto permite un margen de enlace y acción entre modelos que permite comprender mejor los múltiples factores intervinientes de un programa de transferencias condicionadas destinado a comunidades en condiciones particulares de vulnerabilidad en las motivaciones de los municipios beneficiarios para apoyar electoralmente a uno u otro candidato.

Así pues, el punto de partida de nuestro análisis será una conjunción de, por lo menos, dos modelos, a saber: el racional y el sociológico.

El modelo racional parte no solo de los elementos de la economía cómo las teorías de la Elección Social para entender como los candidatos, partidos y votantes toman sus decisiones políticas sino que, de entrada, asume al individuo cómo un ser racional, es decir cómo un ser orientado a maximizar sus objetivos individuales (Sulmont, 2010).

Aquí los agentes toman una decisión electoral por un candidato u otro (o ninguno), a partir de, al menos tres consideraciones: el análisis de los beneficios que les ha proveído el gobierno en turno; los posibles beneficios que le puede proveer los partidos o candidatos contrarios durante su (eventual) gobierno y las probabilidades percibidas de que su voto sea decisivo en el resultado de las elecciones pues, al ser una cuestión de cálculo, si el beneficio de votar es menor que el costo, el agente se abstendrá (Downs, 1957).

Dicho esto, el voto vendría delimitado por la percepción y evaluación del individuo sobre el proceder del gobierno en turno, el contraste entre la capacidad (o incapacidad) de los partidos contrincantes de generar confianza y credibilidad en sus promesas futuras y la percepción valorativa del voto para la elección (Montecinos, 2007).

Aplicando lo anterior al caso del programa Familias en Acción, el modelo racional indicaría, bajo las premisas de Downs (1992), que el panorama político de una democracia actúa como una metáfora del funcionamiento del mercado económico, en el cual los líderes

partidarios cumplen el rol de empresario dentro de una firma (el partido político) que desarrolla la tarea de producir, promover e intercambiar una serie de bienes o servicios (decisiones y políticas públicas, o bien cargos y prebendas) por un recurso de poder que hace las veces de dinero: el voto.

Bajo esta lógica, los municipios beneficiarios de este tipo de programas de asistencia social, serían asumidos como ese público racional pero también “consumidor” de políticas públicas que, en mayor o menor medida, define la suerte de los competidores o candidatos con su decisión de comprar (votar) la oferta de uno o de otro; en este caso, del gobierno en turno o de la oposición.

No obstante, esta decisión viene definida no por la política *per se*, sino que también está determinada en función del propio bienestar del agente, por lo que los municipios beneficiarios para decidir, al menor costo posible, entre las opciones que se le presentan, tiene que comparar entre: la utilidad futura hipotética es decir, las ofertas de los contendientes en la campaña; la utilidad presente es decir, el desempeño actual del partido en el gobierno y unos supuestos hipotéticos o las ofertas de la oposición.

De las tres opciones, la segunda, al basarse en hechos presentes, concretos y comprobables es, por tanto, la más racional para un elector que optar por eventos futuros e inciertos (Fiorina, 1981).

En ese sentido, se esperaría que los beneficiarios de Familias en Acción voten en las elecciones por aquel partido o candidato que se comprometa, de manera creíble, con el programa y asegure la continuidad en el tiempo de la subvención y/o mejoras en los beneficios del mismo. Por el contrario, si los beneficiarios percibieron que su situación empeoró con respecto a la última elección, se esperaría que en la siguiente elección voten en contra de los candidatos del partido en el gobierno.

De esta forma y tal como lo indica Loewenstein (2001) la intermediación de pagos monetarios en lo que se consideran acciones o políticas de orden social, como las transferencias monetarias condicionadas de Familias en Acción, puede fácilmente transformar este ejercicio social en una transacción de mercado electoral.

Por su parte, el modelo sociológico, como su nombre lo indica, parte de la idea de que el elector es un ser social -antes que político-, por lo que las principales variables explicativas de sus actitudes políticas privilegian y/o se forman, a partir de las relaciones sociales o el proceso de socialización que el individuo construye en la convivencia cotidiana con ciertos grupos a los que pertenece o al menos, concurre.

Estos “grupos” no se corresponden únicamente a los socialmente compartidos como la familia, el lugar de trabajo, el barrio y demás, sino que también contempla factores sociodemográficos afines que bien podrían ir desde la edad, el género, el estrato, hasta factores más específicos como la cobertura de ciertos servicios públicos y sociales como la salud y la educación, entre otros.

Esto nos lleva a considerar si las evaluaciones costo-beneficio que, asumimos, eventualmente realizan los municipios beneficiarios del programa Familias en Acción durante las elecciones vienen motivadas de forma unívoca por el canal racional/económico y en clave de los beneficios que han adquirido (o podrían adquirir) en el ejercicio electoral, o si este es reforzado (o atenuado), de forma paralela, por otras variables sociales como las características del medio o los grupos en los que estos municipios se insertan y en los cuales, también confluyen otros municipios beneficiarios para la predilección hacia cierto candidato.

Estas variables de orden socioeconómico podrían estar asociadas a las condiciones de vida compartidas dentro -y entre- éstos municipios beneficiarios, las cuales en el presente trabajo van desde la pertenencia misma al programa como beneficiarios tipo SISBEN 1, la

cobertura educativa del municipio, las Necesidades Básicas Insatisfechas y su condición de minoría.

3. Metodología

En esta sección se estiman dos modelos, uno de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y otro modelo Lag espacial. Los cuales buscan evaluar los efectos del programa Familias en Acción en la votación por Juan Manuel Santos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2010 y si las cuatro variables de control, a saber: NBI, Cobertura de Educación, Minoría. Los criterios utilizados para evaluar el ajuste de los modelos son: a) el *Akaike Information Criterion* (AIC) que evalúa la cantidad de información que se pierde cuando se utiliza un modelo para explicar la realidad, en ese sentido, cuanto menor el valor de AIC mejor el modelo; b) el *Schwarz Criterion* o Criterio de Información Bayesiano (CIB) que ayuda a seleccionar entre uno o más modelos alternativos, por lo que el modelo con el menor valor de BIC implica un número menor de variables explicativas y mejor ajuste y por último, c) el indicador de autocorrelación espacial I de Moran, el cual determina cuánto de la varianza no explicada del modelo se encuentra asociada con algún factor contextual. En ese sentido, cuanto menor sea el I de Moran, menor será su dependencia espacial residual y por lo tanto, mejor su ajuste.

Por otra parte, en lo que respecta a la operacionalización de las variables. Identificamos Familias en Acción como la variable independiente, a partir de los datos por municipios proveídos por el SIG-OT para el año 2010 presentado, inicialmente, como el número de familias pertenecientes al nivel 1 de SISBEN y avalados por el Ministerio del Interior y Justicia con hijos menores de 18 años. Para normalizar la variable, se fijó como tasa multiplicando el valor por cada mil habitantes.

La variable dependiente, por su parte, corresponde al porcentaje de votos por el partido de gobierno durante la primera vuelta, el cual para fines prácticos fue transformado en factor dividiendo cada valor por cien.

Adicionalmente, en lo que corresponde a las variables de control: la variable minorías se ajustó como la sumatoria de los porcentajes de población afrodescendiente e indígena extraídas del DANE para el año 2010. Los valores de NBI, son el porcentaje de personas que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la comunidad a la cual pertenece. En ese sentido, capta condiciones de infraestructura, se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar.

Finalmente, la variable Educación es asumida como la Tasa Bruta de Cobertura en Educación, la cual es un porcentaje que comprende el número de personas entre 5 y 17 años matriculados en educación básica y media, dividida sobre la población total en el rango de 5 a 17 años por cien.

A continuación, se presenta la tabla con los resultados de los modelos.

Tabla 1: Efectos del programa Familias en Acción en las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia.

	Modelo I	Modelo II
Familias	0,00052*** (0,00011)	0,00044*** (9.616446e-005)
Minorías	-0,18979*** (0,02427)	-0,08812*** (0,02033)
NBI	0,03596 (0,02841)	0,01547 (0,02345)
Edu	0,00066** (0,00022)	0,00028 (0,02345)
Constante	0,46012*** (0,02522)	0,15995 (0,026227)
Lag	–	0,60735*** (0,03122)
R2	0,08	0,38
Akaike Info Criterion	-744.589	-1072,95
Schwarz Criterion	-719.624	-1042,99
I de Moran	0,39***	0,05***

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del SIG-OT (2010) y el DANE (2010).

Los resultados preliminares del modelo 1 nos permiten identificar que, efectivamente, Familias en Acción produjo un aumento en la votación de Santos o en otras palabras que, en aquellos municipios donde hubo una mayor distribución de los beneficios de Familias en

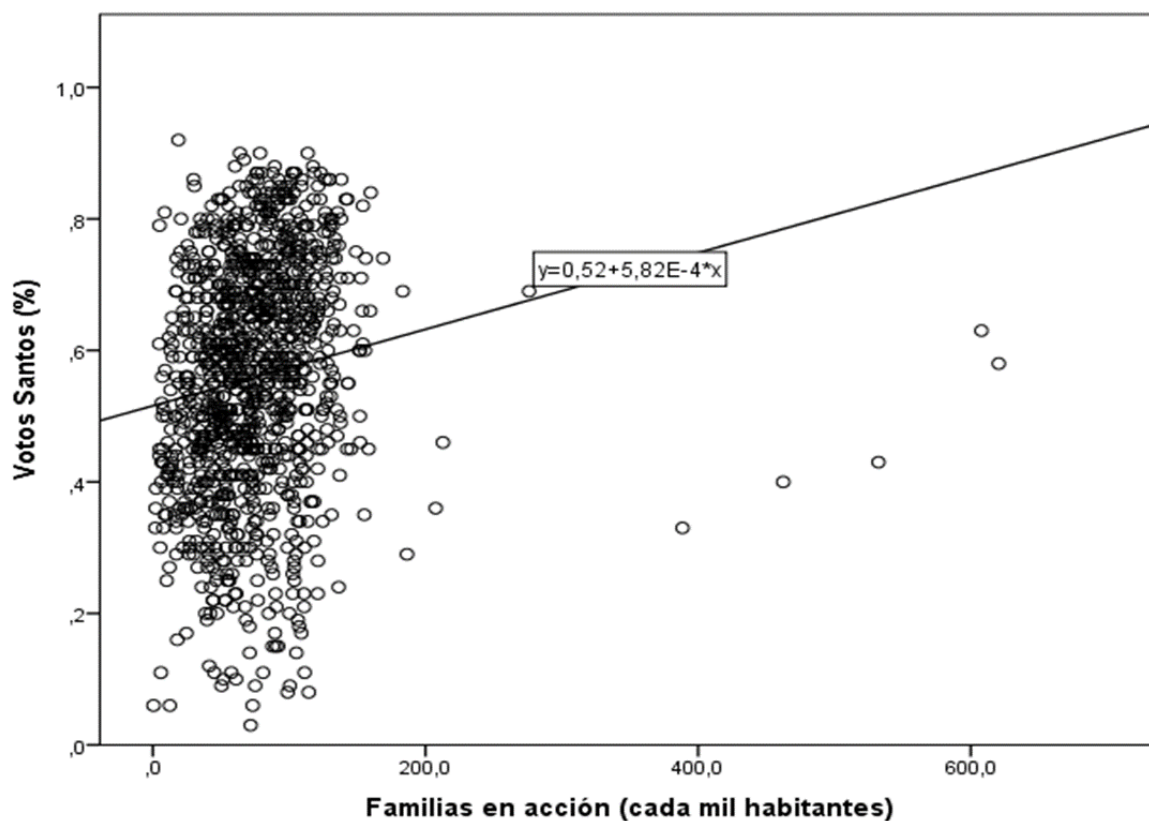
Acción, hubo una votación más alta por el candidato de gobierno. Aunque, cabe anotar que el aumento, en términos generales, fue relativamente insignificante.

En lo que a las variables de control respecta, mientras las NBI no tuvieron una influencia significativa, las minorías étnicas redujeron la votación por Santos y la educación lo aumentó, aunque, de nuevo de manera ínfima.

No obstante, cómo el I de Moran de los errores estándar nos permite identificar hay problemas de dependencia espacial sustantiva (observada a través de un multiplicador de Lagrange). Su solución implica la inclusión de una variable sistemática correlacionada espacialmente en el modelo a través del *Spatial Lag*, el cual introduce la media ponderada de la variable dependiente de los vecinos de cada uno de los municipios como otra de las variables independientes.

El modelo 2, a diferencia del primero, se ajusta mejor pues, al analizar el criterio de Schwarz y de Akaike, en el modelo 1 se obtienen valores de -744,589 y -719,624, respectivamente; mientras en el modelo 2 estos son más bajos. Simultáneamente, al agregar el predictor espacial, el R² ajustado aumenta de 0,08 a 0,38 en el segundo modelo, lo cual es también otro indicio de las mejoras en la precisión del mismo.

Gráfica 1: Familias en Acción versus Votos por Juan Manuel Santos



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (2010) y el SIG-OT (2010).

Respecto a los resultados generales, como se puede ver en la Gráfica 1, aunque no se producen cambios dramáticos, parece ser que, sin importar los modelos, lo que estamos viendo sistemáticamente es que, a más Familias en Acción, más votos para Santos. Por su parte, las NBI no tuvieron una influencia significativa, las minorías étnicas continúan reduciendo la votación por Santos y la educación deja de ser significativa. Así pues, el hecho de que en ambos modelos las NBI persistan como variables no significativas pareciera indicar que a Santos no lo votaron necesariamente los más pobres, sino que lo votaron aquellos quienes recibieron más beneficios del programa.

Adicional, el segundo modelo provee un dato mucho más interesante: un fenómeno de interacción espacial, en el cual la variable independiente no solo afecta positivamente a la dependiente, sino que el valor de la variable dependiente en los municipios vecinos afecta

también positivamente el valor de la variable independiente. Es decir,

“... lo que ocurre en un territorio afecta a otros territorios, lo que ocurre en un punto en el espacio está determinado por lo que pasa en otro(s) punto(s), debido a interdependencias en tiempo y espacio de unidades espaciales como: efectos de difusión (*spillovers effects*), de transferencia, procesos de dispersión, interacciones, externalidades, jerarquías, etcétera” (Pérez Pineda, 2006, p. 137).

En otras palabras, para un municipio no hay solo un impacto positivo asociado a Familias en Acción sobre el voto por Juan Manuel Santos, sino que también hay un impacto de los municipios vecinos sobre dicha votación. Aunque éste, de nuevo, no es un impacto dramático se puede decir que es en aquellos municipios donde se distribuyeron más beneficios sociales de Familias en Acción donde aumentaron los votos por Santos; pero también, donde dicho aumento estuvo influido por el hecho de que, en los municipios vecinos, también se estuviera distribuyendo Familias en Acción.

4. Análisis de Resultados

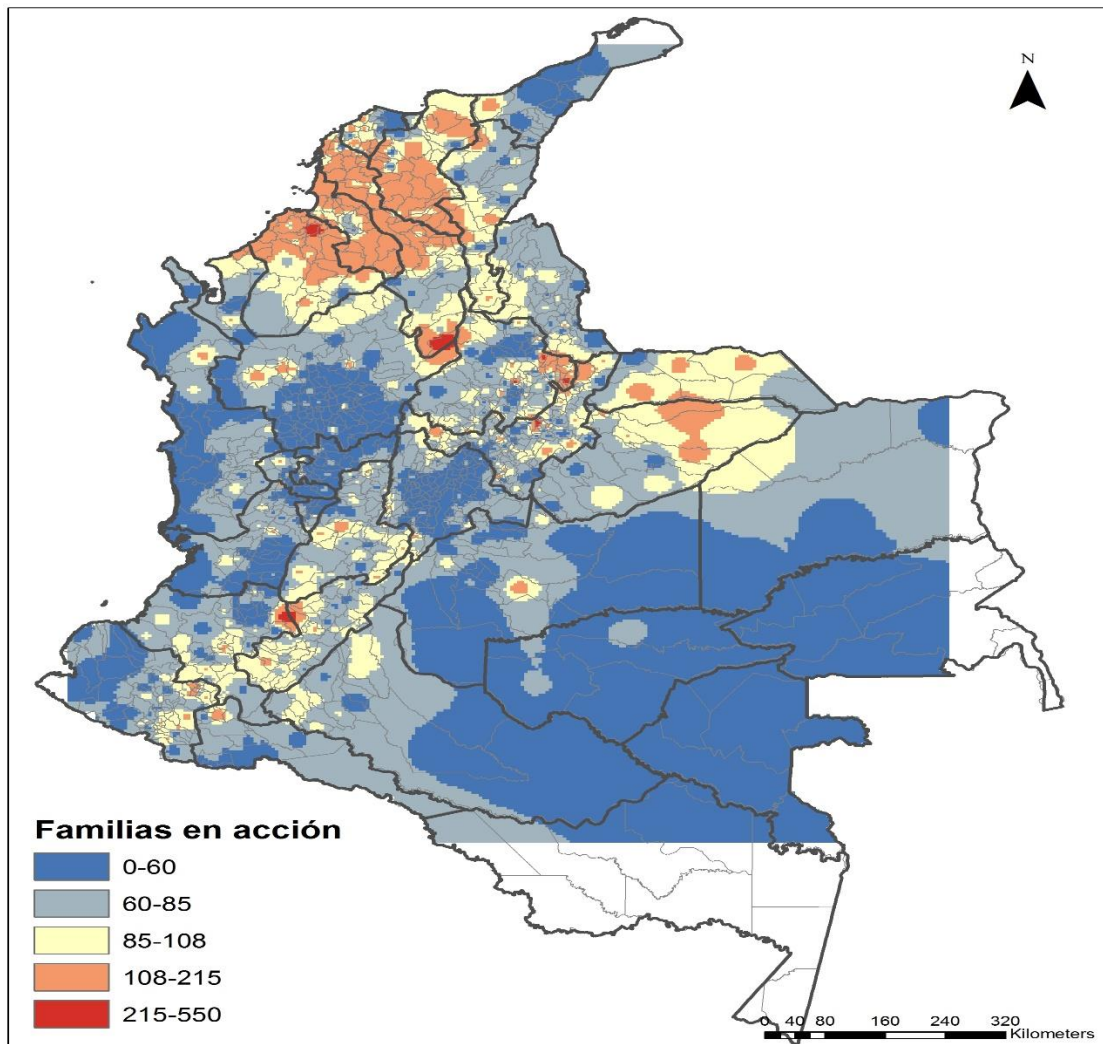
Esta sección pretende interpretar a la luz de los aportes del comportamiento electoral racional y sociológico, los resultados producidos por los modelos y examinarlos, con algunas situaciones extrapolables, del caso de Bolsa Família en Brasil.

Cómo el modelo 2 nos permitió ratificar, hay un impacto electoral del programa Familias en Acción que no obra de manera independiente, sino que es propiciado por un componente espacial, aprovechado racionalmente por quienes distribuyen los beneficios sociales de este programa; pero también, reforzado socialmente por los vínculos construidos entre quienes conviven en tales espacios. Además de un componente de demografía social asociado a las NBI, el nivel de educación y su pertenencia o no, a una minoría como factores explicativos del fenómeno en cuestión.

Así pues, el impacto del programa, más que limitarse positivamente a sus contribuciones en los resultados electorales, es esclarecido por medio de estrategias racionales y sociales que confluyen a través de la dimensión geográfica y las redes que esta propicia en municipios específicos donde una proporción de personas empobrecidas reciben un volumen significativo de recursos del Estado, a los cuales, hasta entonces no tenía acceso.

A continuación, y a partir del gráfico 2, analizaré cómo la confluencia del modelo racional y sociológico que explica el voto soporta los comportamientos intuitivos por los resultados, tanto para el candidato de gobierno (y/o su partido) -entendidos aquí como un solo agente-; como para los receptores del programa y, cómo se dimensiona el impacto electoral del mismo a la luz de tales intuiciones.

Gráfica 2: Mapa de calor de la distribución de Familias en Acción (2010)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (2010) y el SIG-OT (2010).

4.1. El candidato y/o el partido de gobierno.

En lo que respecta al candidato de gobierno (y/o su partido) es importante mencionar que la dinámica de este (o estos) agentes estatales en la teoría de Downs (1957) parte del supuesto de que los partidos formulan su política como un medio para obtener votos, por lo que dicho modelo “establece que los partidos elaboran políticas para ganar elecciones, más que ganar elecciones para formular políticas” (Kuschick; 2004: 57).

En ese sentido, la formulación de una política social como la de Familias en Acción parece reconocerse más como una operación de orden transaccional que de orden netamente social o asistencial, a los ojos de una interpretación racional pura.

Ahora bien, la transposición de este aspecto transaccional y los resultados asociados al efecto espacial que presenta el modelo, nos permite entender cómo el espacio geográfico puede impactar tanto en los resultados electorales, como en las estrategias de los partidos (Johnston y Hughes, 2008; Rodden, 2010).

4.1.1. Resultados electorales.

En lo que respecta a los impactos en los resultados electorales, encontramos que dado que los programas de TMC son generalmente administrados por el gobierno central, estos ineludiblemente afectan la relación entre los municipios beneficiarios del programa y el Ejecutivo. Como explica Rawlings (2005), “a través de la provisión de subvenciones en efectivo directamente a los hogares pobres, programas TMC permiten al gobierno nacional forjar una relación de uno a uno con la población objetivo” (p. 138).

Por ejemplo, en lo que respecta al programa Bolsa Familia, este desempeñó un papel relevante en la elección y posterior reelección de Lula, particularmente entre los votantes más pobres (Hunter y Power, 2007; Zucco 2008). Otros estudios empíricos muestran que Lula no solo fue el candidato preferido en los municipios más pobres, sino también en los municipios con más alta cobertura de beneficiarios de Bolsa Familia (Nicolau y Peixoto 2007; Marques, *et al.*, 2009).

Ahora bien, aunque Familias en Acción no obtuvo en el modelo la incidencia extraordinaria indicada por los estudios para el caso brasileño, hay otros artículos que soportan de manera más sobresaliente las incidencias electorales del mismo sobre las contiendas

electorales colombianas (Barrios González, 2011; Nupia, 2011; Báez, *et.al*, 2013).

Así, lo que parece ocurrir es que, al focalizar el programa en comunidades geográficas y socialmente caracterizadas por altos niveles de pobreza y bajos de actividad económica, el programa o al menos, las transferencias monetarias que realiza, se consolidan como i) un instrumento de bajo costo con alta impacto para sus receptores y como ii) una inversión de alta recompensa política.

El primer aspecto debido a que, para las propias familias, las transferencias de efectivo proporcionan un útil ingreso, que puede ser muy significativo, incluso crítico, en términos de apoyo a los medios de vida para los más pobres (Hall, 2012).

Un ejemplo de ello es el caso de Bolsa Familia y las pensiones rurales distribuidas por el gobierno brasileño, las cuales de manera conjunta dan cuenta de más de la mitad del ingreso familiar de los grupos más pobres y rurales del Norte y Nordeste del país. Los estudios muestran que algunos de los municipios de dicha región, a través de los cuales se ejecuta Bolsa Familia, dependen del programa hasta el 40% de sus presupuestos generales (Marques, 2005).

El segundo aspecto debido a que los programas de transferencia de efectivo pueden servir para agendas distintas -o más allá- de las concernientes al alivio de la pobreza y el desarrollo social. Según Sewall (2008), en contraste con las estrategias de vinculación de clientelas, los vínculos programáticos se basan en las inversiones de los políticos. Así, los partidos políticos ofrecen paquetes (o programas) de políticas que prometen seguir si son elegidos para el cargo.

En lo que concierne al caso de Bolsa Familia, al igual que en Familias en Acción hay quienes han llegado a caracterizar estos programas de transferencias como un intercambio indirecto de votos por beneficios para personas vulnerables (Scott, 2006). De acuerdo con esta lógica, los beneficiarios de Bolsa Familia habían apoyado a Lula y al PT o en el caso colombiano, a Santos y al Partido de la U, ya sea por gratitud a estos o al partido, o por el

interés egoísta de mantener los beneficios de cada programa. Sea cual fuere, los beneficiarios tenían muchas más probabilidades de votar a favor del gobierno que en contra de él.

No obstante, sobre este punto cabe mencionar la posibilidad de diferencias respecto a la magnitud de los impactos electorales de cada programa considerado, si nos centramos en la imagen de cada candidato (Hall, 2012). Pues, mientras Lula Da Silva llega al poder como el primer presidente trabajador del nordeste de Brasil y como líder del programa de Bolsa Familia. Por su parte, Juan Manuel Santos llega en representación de las tradicionales familias oligárquicas de Colombia y como “el delfín” del expresidente Álvaro Uribe Vélez; el cual, más que iniciar el programa, lo amplió y “comercializó” bajo la tutela del partido de la U, un partido creado por él mismo que acompañaría a Santos durante toda su candidatura.

Indicado esto, se esperaría que al ser las transferencias monetarias del programa lo suficientemente esenciales para los municipios beneficiarios, estos tengan más intenciones de votar y de votar por el candidato de gobierno en forma de retribución o miedo a su pérdida, como ocurrió con Lula o, a favor de su continuación o mejoramiento, como ocurrió en el caso de Santos.

4.1.2. Las Estrategias de los Partidos.

Por otra parte, en lo que a las estrategias de los partidos respecta, podemos intuir que en términos logísticos y electorales, la planeación de la distribución de beneficios sociales como los de Familias en Acción se hacen, como se indicó anteriormente, hacia áreas con mayor dependencia de políticas públicas que, aseguren, no solo la necesidad monetaria de la transferencia, sino la potencial dependencia de ella y en consecuencia, una posterior retribución electoral del usuario para impedir su pérdida.

Sin embargo, esta situación también demanda que, en virtud del principio de eficiencia

y de hacer uso de los rendimientos organizacionales a escala, esta distribución se destine, principalmente hacia (o muy cerca) de municipios donde ya se han desplegado recursos estatales previos y en los cuales, el partido de gobierno ha configurado una presencia fuerte o potencialmente arraigada.

Bajo esta lógica, un municipio base se configura también como el estímulo que facilita la transferencia de la presencia o fuerza del partido de gobierno hacia los municipios vecinos; sobre todo, hacia aquellos que están agrupados muy cerca unos de otros y/o en las que convergen características sociales afines (Olivella y Potter, 2015).

La viabilidad estratégica de la geografía en las decisiones de acción de los partidos para cooptar varios municipios es sustentada por Braga y Rodrigues-Silveira (2011) quienes analizan la distribución geográfica del voto para presidente del PT y PSDB entre 1989 y 2010 y donde los resultados indicaron asociaciones geográficas positivas tanto en relación con la variable política -presencia del partido en el territorio-, como con la variable social, -efecto del programa Bolsa Família-.

En concordancia, Cervi (2017) demuestra que los patrones geográficos de votación en los municipios con más alta vulnerabilidad social para las elecciones presidenciales en Brasil, se organizan en función de si el partido está en el gobierno o en la oposición, lo cual exalta las ventajas geográficas que tuvo cada uno de los partidos cuando detentaron el poder en la configuración de sus bases electorales.

Adicional a esto, es posible entrever también que este cierto mecanismo de focalización y difusión, brinda también la posibilidad al partido de operar el programa como un mecanismo de seguimiento en el cual, tras aglutinar la distribución de los beneficios hacia determinada región o conjunto específico de municipios contiguos, permite que quien se consolida como el titular o vocero de su entrega (en este caso, el partido de gobierno) pueda hacer también un “rastreo” de los resultados o beneficios que este le representa en términos de votos *ex-post* a

favor de su campaña durante una elección.

De esta forma, el partido puede develar, si esta región le está retribuyendo -o no- esa extensión de beneficios que se les están otorgando y con base en esto, tomar decisiones que le permitan castigar o recompensar a estos municipios.

Este tipo de intuiciones que parecieran básicas, son claves para entender, en primer lugar, los incentivos que tienen los candidatos para prestar atención a la organización y coordinación de sus recursos, los cuales no solo son escasos, sino que se vuelven más complicados y costosos de administrar a medida que se difunden de forma dispersa -y a veces inconexa- por todo el país.

En segundo lugar, que, consistentemente con los resultados del modelo, la distribución de los programas sociales y la proximidad geográfica entre los distritos que lo reciben parece amplificar los efectos electorales del candidato de gobierno. Es decir, la relación entre la distribución de políticas sociales y los resultados electorales parecen fortalecerse en los municipios geográficamente próximos y debilitarse en los distantes.

4.2. Receptores de Familias en Acción.

Ahora bien, para analizar el comportamiento electoral de los receptores de Familias en Acción es necesario indicar que, como ocurre en cualquier contienda electoral, nos encontramos en un escenario -al menos, racional- que se halla plagado de limitaciones asociadas a problemas de información asimétrica o en su defecto, de falta de información por parte de los votantes sobre los candidatos. Esto, sin contar con las limitaciones que atañen al costo de informarse y a la imposibilidad de que el agente conozca todos los factores que puede afectar su decisión (Fernández de Mantilla y Flórez Pinilla, 2008).

No obstante, a pesar de la sofisticación de las herramientas que modelan el

comportamiento político, es innegable el hecho de que cualquier votante responde a un contexto de índole institucional y de índole social, los cuales determinan los incentivos y las restricciones que enfrentan los votantes en el proceso de competencia, pero también, las decisiones que toman en función de las presiones y condiciones sociales en las que viven, respectivamente (Vilalta y Perdomo, 2003).

Para salvar estos vacíos comportamentales de la teoría, Downs (1957) sugiere que, en cualquier democracia, a pesar de lo costoso que supone acceder a la información. Ésta se disemina indiferentemente entre sus integrantes como información gratuita, la cual discurre con mayor fuerza en épocas tan controversiales como las electorales. Siendo así, el agente no sólo ha de informarse “a fuerza”; sino que intuitivamente, ha de seleccionar unos pocos datos o *issues* de la amplia oferta informativa existente que le representen interés, utilidad o incidencia en su condición o entorno inmediato.

Ahora bien, la información gratuita no viene dada de forma etérea, sino que requiere de un medio para fluir, éste al aludir a un otro y a una comunidad, compete inexorablemente a un ser social y por ende, a un modelo electoral eminentemente sociológico. Así, la preponderancia de información que un vehículo social transporta se puede comprobar a través de los resultados del modelo, al menos, de dos formas que no son mutuamente excluyentes, a saber: la conexión de habitantes y beneficiarios al interior de un municipio y en municipios adyacentes, pero también la alta concentración y convivencia entre beneficiarios.

Sobre el primer aspecto, es necesario indicar que todo individuo crea una conexión primaria con la comunidad y/o el municipio base en el que se asienta, pero esta situación no excluye la relación con personas o familiares, la asistencia a eventos o cuestiones laborales, entre otros, con miembros de comunidades pertenecientes a los municipios vecinos al suyo. Por supuesto, esta confluencia e interacción se espera que sea significativamente más sólida entre personas de municipios cercanos dentro de una misma región, en detrimento de

diferentes. Esto, en parte, porque en contextos tan diversos como Colombia, no se presenta de la misma forma la convergencia entre municipios dentro de una misma región idiosincrásica que aquella entre municipios de regiones diversas. Así, pareciera ser que los vínculos que cierta localidad establece con sus municipios vecinos ayudan a vaticinar, al menos para el caso del programa social Familias en Acción, la proclividad electoral que se configura dentro -y entre- los municipios con mayor número de receptores.

Un caso que soporta este tipo de conexión espacial del voto entre beneficiarios sociales del Estado es presentado por Soares y Terrón (2008), quienes demuestran cómo la existencia de un número extenso de comunidades vecinas entre sí en el Nordeste de Brasil que, al mismo tiempo presentaban altas proporciones de su población que recibían beneficios del programa Bolsa Familia, fue una de las principales causas de la formación de un patrón regionalizado del voto por Lula en la elección de 2006.

En ese sentido, no sólo la alta cobertura local del programa, sino también la cercanía física entre estas comunidades serían factores relevantes para explicar el patrón de voto por el candidato de gobierno y su especial concentración en determinadas partes del territorio.

El segundo aspecto atañe a cómo el flujo de información gratuita puede impactar significativamente al convergir una alta concentración de beneficiarios en uno o más municipios aledaños y adicional, la coexistencia de espacios de socialización comunes provistos para los mismos por el programa.

Éste último punto se debe, en parte, a la lógica de este tipo de programas que gira en torno a una transferencia monetaria regulada bajo el cumplimiento de unas condicionalidades, las cuales van desde la concurrencia a IPS o centros educativos comunes donde se realizan los controles físicos y la certificación de la asistencia de los menores del hogar a clase, hasta la participación de las madres titulares/receptoras en los espacios de bienestar comunitario como las Asambleas de Madres Beneficiarias del Programa y encuentros pedagógicos de cuidado.

Espacios donde se generan e incrementan las redes sociales que crean capital social para el hogar y los beneficiarios, posibilitando la interacción, la socialización y la cooperación entre beneficiarios y/o entre familiares de beneficiarios (DPS, 2012).

Prueba de los efectos de esta socialización, se ven apoyados por los resultados de la investigación que hace Kerbauy (2011) de las elecciones presidenciales de 2010 en Brasil donde, a través de una serie de encuestas, analiza la relación entre la participación en los programas de transferencias monetarias y el impacto en la percepción política del voto. Sus hallazgos resaltan el hecho de que tener a alguien de la familia o algún conocido que participe en algún programa de esta índole, parece haber influido más el voto del entrevistado que su propia participación, con destaque para el Programa Bolsa Familia.

Parece ser que más allá de una cercanía geográfica y social entre beneficiarios propiciada por el espacio físico, hay también un espacio social nutrido por espacios instituidos por el programa mismo que aportan más elementos para desentrañar cómo discurre la información gratuita -deseada o no- hacia un potencial votante estimado racional, pero que es ineludiblemente intervenido por entornos sociales que le proveen short cuts sobre qué alternativas electorales, dadas sus condiciones de beneficiario social del estado, le son de mayor provecho para sus perspectivas o intereses futuros.

En general, a lo que ambos aspectos parecen aludir es a la necesidad de un análisis espacial del comportamiento electoral, el cual según Vilalta y Perdomo (2003) supone -como mínimo- tres perspectivas teóricas, a saber: a) la difusión espacial, que refiere a la transferencia de ideas de un municipio a otro (O'Loughlin, 2002); b) los efectos composicionales, que corresponden a como la comunidad residente de un municipio, barrio o región sostiene intereses sociales específicos que pueden ir en contravía de las tendencias nacionales (Pattie y Johnston, 2000; Shin y Agnew, 2002) y, c) los efectos contextuales, los cuales atañen al efecto producido por las características socioeconómicas que posee cada votante según su localización

(McAllister, 1987; McAllister y Studlar, 1992).

Indicado esto, en lo que los resultados parecen coincidir es que aunque mas de una de las perspectivas citadas logra explicar el fenómeno descrito en el modelo, el principal hallazgo es más afín hacia las formas que toma la difusión espacial de las ideas políticas. No obstante, este desplazamiento de ideas, a su vez, puede darse de cuatro formas (Haggett, 1983 y Hornsby, 2003): expansión, relocalización, difusión contagiosa y difusión jerárquica.

Así, la expansión ocurre cuando la propagación de ideas inicia en una fuente y se esparce a nuevos lugares sin dejar de existir en su lugar de origen; la relocalización sucede cuando el fenómeno se esparce desde una fuente a nuevos lugares, pero deja de existir en el lugar de origen; la difusión contagiosa es aquella donde la propagación requiere del contacto directo entre individuos y es dependiente de la distancia física y por último, la difusión jerárquica que se presenta cuando la propagación va de lugares más grandes a lugares más pequeños (Vilalta y Perdomo, 2003).

Cómo los individuos y las comunidades que configuran aquí los municipios donde se da una mayor distribución de los beneficios de Familias en Acción presentan una contigüidad física de vecindad y una proclividad mayor a la interacción en su condición de beneficiarios, podemos intuir que el elemento central de la información que fluye desde -y entre- ellos sobre ideas y comportamientos políticos tiende a ser del tipo contagioso que provoca que los resultados de una relación causal determinada se extiendan o se extiendan más allá del territorio de una u otra localidad en particular (Johnston y Pattie, 2004).

Es decir, la difusión es un efecto espacial que se produce como función de la contigüidad o la proximidad física, la cual nos ayuda a entender que el comportamiento político en un lugar está conectado, pero también es construido de forma dialéctica con comportamientos y particularmente, con situaciones políticas específicas, como la pertenencia a programas sociales, en lugares vecinos.

5. Consideraciones Finales

Este artículo trata de abordar los impactos de la pertenencia al programa Familias en Acción para los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia para 2010 y como, a través de una síntesis de aportes del modelo electoral racional y sociológico, es posible desentrañar las dinámicas que sustentan tales impactos.

Los resultados presentados aquí indican que los patrones de votación por Juan Manuel Santos estuvieron efectivamente favorecidos -aunque no sustantivamente- por los votos de los municipios beneficiarios de Familias en Acción y que estos estuvieron notablemente fortificados por un aspecto no ahondado en estudios precedentes relativos al caso colombiano -aunque sí en los concernientes a Bolsa Familia- que atañe al factor geográfico y las redes sociales construidas por los beneficiarios como un determinante clave en la distribución del programa y en la formación de las preferencias electorales.

Así, de la discusión anterior es evidente que los municipios beneficiarios de Familias en Acción no votan a favor del candidato de gobierno solo por el hecho regulado de recibir una transferencia monetaria, sino que estos tienden a ello gracias a un proceso de convivencia y socialización sustentado, de forma conjunta, por espacios institucionalizados provistos por el programa como por la interacción suscitada por estos entre personas igualmente beneficiarias que, en función de sus expectativas futuras, potencian -y se potencian mutuamente- hacia aquella opción electoral que les represente mayor utilidad. Para el caso de Colombia esta se encarna en la candidatura de Santos, en tanto su predecesor y partido, fueron quienes emprendieron y maximizaron -a su nombre- los alcances del programa.

Otro aspecto central es, cómo indica Strøm (1990) que, “los modelos de elección racional sobre los partidos (...) no han conseguido generar una teoría simple y coherente del comportamiento competitivo de los partidos o producir resultados robustos que puedan

aplicarse bajo una variedad de condiciones ambientales” (p. 565). Pues, los hallazgos han probado cómo el relajar los supuestos centrales del modelo de elección racional y nutrirlo con visiones más blandas -pero igualmente válidas- como aquellas que apelan a elementos de índole social, es posible hacer que las representaciones de los actores políticos tengan un rango mucho más amplio de objetivos y de acción.

En ese sentido, se puede argumentar que la consecución del voto y el voto *per se* atañe no solo a una cuestión racional sino estratégica; no obstante, para que ambos procesos alcancen dicho carácter requieren ineludiblemente de una perspectiva social y espacial que permita explicar lo que los cálculos someros de rentabilidad o utilidad no permiten apreciar.

Así pues, los efectos electorales de la política derivan no sólo de una focalización efectiva en los más pobres, sino también de una consideración de las características contextuales de su implantación. En este caso más que *clusters* de afinidad en condiciones socioeconómicas se han creado aglomeraciones de municipios contiguos que reciben en gran cantidad los beneficios de Familias en Acción. Es por ello que la combinación entre una alta proporción de municipios beneficiarios y una gran cantidad de municipios contiguos con características similares es la verdadera responsable del efecto potencial de Familias en Acción en el voto de la primera vuelta por la presidencia por Juan Manuel Santos.

Finalmente, respecto a la implicación teórica de utilizar una perspectiva de difusión espacial hay que exaltar cómo su inclusión permite comprender cómo el comportamiento político en un lugar está conectado con comportamientos políticos en lugares vecinos y que efectivamente hay una dependencia espacial de los fenómenos sociales.

Considerar este factor invita también a futuros estudios a contemplar la capacidad explicativa de incorporar nuevas perspectivas y probar teorías geográficas cómo un medio para acercarse de forma más fidedigna a las realidades sociales, tanto para la formulación y evaluación de políticas públicas cómo para el análisis del comportamiento político.

Bibliografía

Báez, J.; Camacho, A.; Conover, E.; Zárate, R. (2012). Conditional Cash Transfers, Political Participation, and Voting Behavior. *Policy Research Working Paper*. Washington: World Bank.

Barrios González, M. (2011). Clientelismo y Familias en Acción: una mirada desde lo local. *Revista Opera*. Vol. 11, pp. 147-164.

Braga, M. y Rodrigues-Silveira, R. (2011). Competição Partidária e Territorialidade do Voto: Mudanças na Distribuição do Padrão Espacial do Voto para Presidente da República do Brasil. *XXXV Encontro anual da Anpocs*. Caxambu MG.

Carpini, M., & Keeter, S. (1996). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.

Carraro, A; Araujo, A. y Damé, O. (2007). “Es la Economía, Compañero!": Un Análisis Empírico de la Elección de Lula sobre la Base de Datos Municipales. *MG Working Paper*.

Cervi, E. (2017). Análisis Espacial del Desempeño Electoral del PT y PSDB entre 1994 y 2014 en Brasil. *América Latina Hoy*. Vol. 75 , p. 55-74.

Cornelius, W. (2004). Mobilized Voting in the 2000 Elections: The Changing Efficacy of Vote Buying and Coercion in Mexican Electoral Politics. *Mexico's Pivotal Democratic Election*, Ed. Jorge I. Domínguez y Chappell Lawson. Stanford, CA: Stanford University Press, p. 47–65.

Dalton, R. J. (1996). Political cleavages, issues, and electoral change. *Comparing Democracies: Elections and voting in global perspective*, p. 319-342.

Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1993). Measuring political knowledge: Putting first things first. *American Journal of Political Science*, 37(4), 1179.

De La O, A. (2013). Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico. *American Journal of Political Science*, Vol. 57, No. 1, pp. 1-14.

Díaz-Cayeros, A., Estevez, F. y Magaloni, B. (2007). “Strategies of Vote Buying: Social Transfers, Democracy and Welfare in Mexico.” Stanford University.

_____. (2009). “Welfare Benefits, Canvassing and Campaign Handouts. *Consolidating Mexico's Democracy: The 2006*

Presidential Campaign in Comparative Perspective, ed. Jorge Domínguez, Chappell Lawson, and Alejandro Moreno. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 229–331.

DPS (2012). *Impactos de largo plazo del Programa Familias en Acción en municipios de 100 mil habitantes*. Departamento Nacional de Planeación: Unión Temporal de Econometría S.A.

Downs, A. (1957). Una Teoría Económica de la Acción Política en una Democracia. *Lecturas de teoría política positiva*. Colomer, J. (Comp). Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, España.

_____. (1992). Teoría económica de la acción política en una democracia. *Diez textos básicos de Ciencia Política* (pp. 93-111). Ariel.

Fernandez de Mantilla, L. y Flores Pinilla, K. (2008) ¿Qué evalúa el ciudadano al momento de votar? Algunas apreciaciones desde el Enfoque Racional. *Reflexión Política*. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vol. 10 (19), pp. 196-204.

Gamir Orueta, A.; Ruiz Perez, M. y Seguí Pons, J. (1995). *Prácticas de análisis espacial*. Barcelona: Oikos-Tau.

Green, T. (2006). Do Social Transfer Programs Affect Voter Behavior? Evidence from Progresa in Mexico. University of California, Berkeley

Haggett, P. (1983). *Geography a Modern Synthesis*. Nueva York: Harper Collins Publishers.

Hall, A. (2012). The Last Shall be First: Political Dimensions of Conditional Cash Transfers in Brazil. *Journal of Policy Practice*. 11:1-2, p. 25-41. DOI:10.1080/15588742.2012.624065.

Hornsby, K. (2003). *Spatial Diffusion: Conceptualizations and Formalizations*. National Center for Geographic Information and Analysis, Department of Spatial Information Science and Engineering. University of Maine.

Hunter, W. y Power, T. (2007). Recompensando a Lula: poder ejecutivo, política social y las elecciones brasileñas de 2006. *Política y Sociedad Latinoamericanas*. Vol. 49 (1), p. 1–30.

Johnston, R. y Pattie, C. (2004). *Putting Voters in Their Places: Geography and Elections in Great Britain*. Oxford: Oxford University Press.

Kerbauy, M. (2011). Os Programas de Transferência de Renda e o Voto Regional nas Eleições Presidenciais de 2010. *Opinião Pública*. Vol. 17 (2), pp. 477-492.

Kuschick, M. (2004). Teorías del Comportamiento Electoral y Algunas de sus Aplicaciones. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. XLVI (190), p. 47-72.

Lau, R. R., & Redlawsk, D. P. (1997). Voting correctly. *American Political Science Review*. Vol. 91 (3), p. 585-598.

Layton, M. y Smith, A. (2015). Incorporating Marginal Citizens and Voters: The Conditional Electoral Effects of Targeted Social Assistance in Latin America. *Comparative Political Studies*. Vol 48, Issue 7, pp. 854 - 881.

Loewenstein, G. (2001). The creative destruction of decision research. *Journal of Consumer Research*. Vol, 28 (3), p. 499-505.

Marques, R. (2005). Importância da Bolsa de Família dos municípios brasileiros. *Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate 1*. Brasília: Ministério Social de Desarrollo.

Marques, R., Marcel Guedes Leite, Á., y Ribeiro, M. (2009). Discutindo o papel do programa Bolsa Família na decisão das eleições presidenciais brasileiras de 2006. *Revista de Economía Política*. Vol. 29 (1), p. 114–132.

McAllister, I. (1987). Social Context, Turnout, and the Vote: Australian and British Comparisons. *Political Geography Quarterly*. Vol. 6, pp. 17-30.

_____ y Studlar, D. (1992). Region and Voting in Britain, 1979-87: Territorial Polarization or Artifact?. *American Journal of Political Science*. Vol. 36 (1), pp. 168-199.

Mejía Guinand, L. B., Botero, F., y Rodríguez Raga, J. C. (2008). ¿Pavimentando con votos? Apropiación presupuestal para proyectos de infraestructura vial en Colombia, 2002-2006. *Colombia Internacional*. Vol. 3 (68), p. 14-42.

Montecinos, E. (2007). Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a la teoría de redes. *Revista de Ciencias Sociales*. Vol. 13(1), p. 9-22.

Nicolau, J. y Peixoto, V. (2007). As Bases Municipais da Votação de Lula em 2006 . *Cadernos do Fórum Nacional*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Altos Estudos.

Nupia, O. (2011). Anti-Poverty Programs and Presidential Election Outcomes: Familias en Acción in Colombia. *Documentos CEDE*, Universidad de los Andes - CEDE.

Olivella, S., y Rodríguez, J. (2009). Lo espacial es especial: La decisión de voto por proximidad en Colombia. *Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia*, 107-124.

O'Loughlin, J. (2002). "Spatial Analysis in Political Geography". En: Agnew, K. Mitchell y G. Tuathail (eds.), *A Companion to Political Geography*. Forth-Coming, Oxford.

Pérez Pineda, J. (2006). Econometría espacial y ciencia regional. *Investigación económica*. Vol. 65(258), p. 129-160.

Potter, J. D., y Olivella, S. (2015). Electoral Strategy in Geographic Space: Accounting for Spatial Proximity in District-level Party Competition. *Electoral Studies*. Vol. 40, p. 76-86. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.06.009>.

Rawlings, L. (2005). A New Approach to Social Assistance: Latin America's Experience with Conditional Cash Transfer Programs. *International Social Security Review*. Vol. 58 (2).

Sanches, D. (2013). The Effects of Conditional Cash Transfer Programs on Latin American Presidential Elections (Tesis Doctoral). University of Illinois, Urbana (Champaign).

_____. (2016). Transferência De Renda E Eleições: A Trajetória Latino-americana. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, Vol. 31(90), pp. 99-114.

Scott, C. (2006). *The Accidental President of Brazil: An Interview with Fernando Henrique Cardoso*. LLILAS Portal, University of Texas Austin.

Sewall, R. (2008). Conditional Cash Transfer Programs in Latin America. *SAIS Review of International Affairs*. Johns Hopkins University Press. Vol. 28(2), p. 175-187. DOI: 10.1353/sais.0.0019

Shin, M. y Agnew, J. (2002). The Geography of Party Replacement in Italy, 1987-1996. *Political Geography*. Vol. 21 (2), pp. 221-242.

Soares, G. y Terrón, S. (2008). Dois Lulas: a geografia eleitoral da reeleição (explorando conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial). *Opinião Pública*. Vol. 14 (2), pp. 269-301.

_____. (2010). As Bases Eleitorais de Lula e do PT: Do Distanciamento ao Divórcio. *Opinião Pública*. Vol. 16 (2), pp. 310-337.

Strøm, K. (1990). A Behavioral Theory of Competitive Political Parties. *American Journal of Political Science*. Vol. 34, pp. 565-598.

Sulmont, D. 2010. *Los enfoques teóricos sobre el comportamiento electoral*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Vilalta y Perdomo, C. (2003). Perspectivas geográficas en la sociología urbana: la difusión espacial de las preferencias electorales y la importancia del contexto local. *Estudios Demográficos y Urbanos*. Septiembre-Diciembre, Núm. 54, pp. 537-557.

Zucco, C. (2008). The President's "New" Constituency: Lula and the Pragmatic Vote in Brazil's 2006 Presidential Elections. *Journal of Latin American Studies*. Vol. 40 (1), p. 29-49.

_____. (2013). When payouts pay off: Conditional cash transfers and voting behavior in Brazil 2002–10. *American journal of political science*. Vol. 57(4), p. 810-822.

_____. (2010). *Conditional Cash Transfers and Voting Behavior: Redistribution and Clientelism in Developing Countries*. Princeton University.